

¿Hacia dónde va Argentina?

Ángel Pérez González

Recientemente se ha desencadenado en Argentina una tormenta descomunal que ha conmovido los cimientos más profundos de la República dando al traste con la imagen internacional de país moderno que había ido adquiriendo. Para cualquier observador exterior parece que hay tres países: uno, el de los políticos, que no hacen más que pedir sacrificios a sus paisanos y dinero a los otros países para hacer una reforma "a su estilo" que nunca acaba de dar fruto, otro, el de los que ya se han ido, y un tercero, el de la mayoría, que a través de caceroladas denuncia su miseria y el imposible acceso a sus propios ahorros.

Poco a poco, esa imagen excepcional en América Latina que identificaba Argentina como una nación moderna, con una clase media vibrante y un futuro prometedor se desvanece. Comenzó a desvanecerse en los años ochenta, cuando la dictadura y la guerra de las Malvinas dejaron claro que numerosas decisiones se tomaban ya sin atender al sentido común. Lo que era difícil de predecir entonces es lo que sucede ahora, a saber, la continuidad de prácticas corruptas, la falta evidente de patriotismo que generaliza el desprecio al interés general entre empresarios, sindicatos y miembros de la clase política, y la depresión emocional del ciudadano medio, otrora emprendedor y hoy prácticamente abandonado a su suerte. Argentina sufre hoy una tremenda crisis económica, una mayor si cabe crisis polí-

tica e institucional y una dramática crisis de identidad. Sin comprender y aceptar este hecho, la crisis no es meramente económica, difícilmente se puede entender la envergadura de los padecimientos argentinos y las dificultades que encuentran aquellos que buscan una solución.

En un marco político siempre tenso, en julio de 2001 se dictó auto de procesamiento contra el ex presidente Carlos Menem; acompañado de nuevas tensiones con Brasil, y una crisis regional acelerada tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, el país cumple su cuarto año consecutivo de recesión¹ sin que ninguna de las medidas tomadas hasta ahora, dolarización parcial incluida, hayan resuelto nada. Parece evidente que ha llegado el momento de hacer frente a la crisis con un gran pacto político que la propia naturaleza del sistema de partidos, primitivo y extremadamente volátil, hace francamente difícil. Éste es el estado de cosas tras poco más de dos años de gobierno de la alianza de centro-izquierda² Unión Cívica Radical-Frente País Solidario (UCR-Frepaso). Dos años en los

que se han sucedido tres ministros de economía. El primero, José Luis Machinea, ministro hasta marzo de 2001 renunció a su cargo tras el fracaso de su plan de "blindaje financiero" pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que incluía una aportación española de mil millones. Le sucedió el neoliberal López Murphy y a este el ministro Domingo Cavallo con la ambición de compaginar regeneración política, Machinea abandonó el cargo en medio de presiones políticas y escándalos financieros, y reactivación económica. Se reconoce así una premisa básica, el acuerdo y soporte político de cualquier reforma es necesario para garantizar su éxito.

El modelo de reformas.

Tanto Machinea como López Murphy dieron prioridad a la reducción del déficit fiscal y del endeudamiento. El esfuerzo, aunque loable en sus objetivos, exigió un aumento impositivo que hizo, dadas sus consecuencias sociales y las dificultades de recaudación, fracasar la reforma. Los ajustes

¹ Sergio Plaza Cerezo, "Crisis económica en Argentina". Política Exterior nº.79, enero/febrero 2001. También es interesante a este respecto la entrevista a José A. Ocampo (Secretario Ejecutivo de la Cepal), publicada en El País Negocios (Madrid), 30 de septiembre de 2001 (pág. 16).

² Sobre el fin del gobierno presidido por Menem y la victoria de De la Rúa es esclarecedor el artículo de Isidoro Cheresky, "Argentina ¿hacia una democracia tranquila?". Política Exterior nº. 74, marzo/abril 2000.

drásticos carecían de posibilidades de éxito, porque carecían de apoyo social y político. Cavallo al ocupar su cargo, ante lo evidente, la reducción del déficit no necesariamente ayuda a la reactivación

*la colaboración del FMI
concedió un respiro al
gobierno argentino
garantizando la
continuidad de la ayuda*

económica, intentó cambiar el orden de los factores. Antepuso la reactivación a la reducción del gasto en una nueva estrategia que pretendía la reactivación económica, el apoyo político y la generación de nuevas ilusiones entre los argentinos. Entre las nuevas medidas adoptadas se encontraba la introducción del cambio eurodólar para las exportaciones, fórmula mal acogida por los mercados internacionales, pero que dio satisfacción a los defensores de una política considerada ineludible en un país en permanente estado de recesión. Sin embargo los males estructurales de la economía, como el crónico déficit fiscal, persistían y exigían una atención que se tradujo parcialmente en el plan de competitividad, que no

solo recogía medidas reactivadoras sino también de reestructuración impositiva con la introducción de un nuevo impuesto sobre transacciones bancarias que permitió salvar la situación sin resolver el problema del gasto público. La solvencia del Estado siguió en entredicho, a pesar de lo cual el ministro se prodigó en declaraciones que parecían contradecir lo evidente afirmando que Argentina haría frente a sus compromisos del año 2001 (14.300 millones de dólares) sin ayuda exterior. Afirmaciones que, evidentemente, no convencieron a nadie fuera del país, mucho menos tras la introducción del euro en la convertibilidad. Los mercados internacionales recondujeron su atención al problema fiscal mientras teóricos como Robert Samuelson y Charles Calomiris³ insistían en lo inevitable de la suspensión del pago de la deuda y en las posibilidades de contagio a otras áreas de Latinoamérica.

Los problemas de Cavallo para poner en marcha un plan de reactivación aceptado por todos dentro y fuera de Argentina parecían insolubles, y de hecho obligaron al ministro a tomar en consideración la postura de los mercados internacionales e iniciar un cam-

³ Guillermo Medina, "Argentina: la crisis permanente". Política Exterior n.º.83, septiembre/octubre 2001.

bio de estrategia adelantando una idea que no era nueva, el canje de la deuda, en un plan que pretendía despejar dudas y que se basaba en dos elementos esenciales: ajustar el pacto con el FMI y reestructurar la deuda a corto plazo. La colaboración del FMI concedió un respiro al gobierno argentino, garantizando la continuidad de la ayuda (1.200 millones de dólares en mayo de 2001), mientras la reestructuración de la deuda pública se convertía en un éxito para el ministro Cavallo,

*por más que el ministro era
bendecido con halagos
dentro y fuera del país,
persistía la duda sobre su
capacidad para aplicar sus
planes de reforma*

permitiendo la recolocación de 30.000 millones de dólares. En junio se procedió al anuncio de un nuevo conjunto de medidas, la mayoría de carácter técnico y difícil comprensión para los ciudadanos que, lejos de mejorar las cosas, generaron un nuevo brote de desconfianza, reforzada con el anuncio de la aplicación de un sistema de convertibilidad ampliada para el comercio exterior que en la práctica supuso una devaluación del 8% del peso.

Pretendía facilitar las exportaciones, pero abrió la caja de los truenos al considerarse en el exterior que lo que se avecinaba era no solo la implantación de meras medidas comerciales sino la devaluación formal del peso, una reacción muy distinta a la de la población argentina que manifestó un apoyo más que razonable (70%) a la política de Cavallo. Las disfunciones entre la imagen interior y exterior de las medidas económicas de junio configuraban un cuadro preocupante en el que destacaban varios elementos, a saber, la capacidad de generación de confianza de Cavallo, algo en sí mismo bueno, y la debilidad de la imagen de Argentina en el exterior. Por más que el ministro era bendecido con halagos dentro y fuera del país, persistía la duda sobre su capacidad para aplicar sus planes de reformas. Era ya evidente a esas alturas que Argentina exportaba desconfianza más que otra cosa, algo agravado por los rumores en julio de 2001 sobre la renuncia del presidente de la República, De la Rúa y de la elección como presidente interino del gobernador del Chaco, Ángel Rozas. Aunque los rumores fueron negados contundentemente desde la Casa Rosada, lo cierto es que ponen de manifiesto la extraña maraña de intereses tejidos en la vida política ar-

gentina, dispuestos a desestabilizar al gobierno.

Es evidente que los grupos con intereses enfrentados a las reformas, especuladores y sindicatos radicales; la oposición política vinculada al ex presidente Menem o, sencillamente, la política de los gobernadores regionales, con frecuencia no coincidentes con el gobierno central, cuando no opuesta; constituían y siguen conformando un espacio amplio de inquietud que bien puede decirse que ponen en tela de juicio la propia estructura institucional de la república.

Crece la desconfianza.

A pesar del relativo éxito de los planes de reformas, lo cierto es que Argentina sigue generando desconfianza. La tensión política permanente, azuzada por el enfrentamiento en junio y julio del año 2001 entre gobierno de la República y los gobernadores provinciales, que exigían al gobierno ayuda presupuestaria, genero desconcierto inicial, y pánico cuando el gobierno decidió conceder ese apoyo financiero. Los analistas internacionales consideraron, con razón, que semejante maniobra repercutiría en el déficit.

Las consecuencias no se hicieron esperar: la tasa de riesgo país se elevó hasta superar los 1000 puntos, la bolsa se desplomó y la atención internacional volvió a fijar su mirada no en los éxitos, sino en las deficiencias de las medidas económicas aplicadas.

Las declaraciones de miembros de la clase política o formulaciones de intenciones posteriores del gobierno no sirvieron de nada. Tampoco tuvieron éxito los apoyos manifestados por el sector bancario local⁴, en el que es importante la presencia española; el apoyo a De la Rúa desde todos los sectores políticos, increíble a tan solo unos meses de su intento aparente de derribo; ni el compromiso de las provincias de recortar el gasto público en 1600 millones de dólares. Sencillamente resultaban poco creíbles en un país cuya imagen se ve asociada cada vez más con corrupción, irresponsabilidad, evasión fiscal e inseguridad. Exactamente los elementos definitorios de otros estados latinoamericanos y que Argentina había sabido durante décadas evitar.

Lo que los mercados reclamaban y siguen reclamando hoy son medidas de reforma estructural, que necesariamente afectarán al mercado

⁴ Así se manifestó la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (FUCAES). El País (Madrid), 6 de noviembre de 2001.

laboral, las subvenciones estatales, el proteccionismo que no acaba de abandonarse o la devaluación del peso, una posibilidad que analistas de prestigio⁵ consideran plenamente razonable en circunstancias tan graves y que, hasta ahora, Domingo Cavallo no ha querido si quiera plantear. Se critica sobre todo la tardanza en hacer frente al déficit con una disciplina fiscal que no acaba de imponerse. Operaciones como el canje de la deuda permiten ganar tiempo, pero no solucionan el problema, de hecho lo podrían agravar pues ese aplazamiento otorgado por el canje de deuda no es gratuito. El coste adicional en caso de que la economía no se recupere, como parece que está sucediendo, no sería desdeñable. Hace falta una reforma de fondo que modifique la relación entre gobierno y provincias, así como entre gastos y recaudación impositiva, que por mor de reformas fiscales ineficientes y la grave crisis social del país no hace sino decrecer.

El nuevo plan: más de lo mismo

Si algo ha caracterizado los planes de reformas económicas en Argentina es la sucesión vertiginosa

de sus formulaciones ante el fracaso o el éxito solo parcial de las medidas inmediatamente anteriores. Siempre sin embargo con el mismo lastre, la mala imagen de Argentina y la incapacidad para dar traducción política a un conjunto de reformas necesarias pero costosas. La competitividad de la economía argentina hace inevitable plantearse como meta la reforma del estado, cuya ineficiencia es dramática en las circunstancias de crisis actuales.

Para ello entre julio y noviembre se plantearon públicamente varias reformas necesarias: pensiones, gastos sociales y gasto público de nación y provincias. Este objetivo deslavazado acabó por tomar forma en noviembre de 2001 en un decreto urgente al que se reconoció carácter de plan económico y cuyo mérito más importante de forma inmediata fue mejorar siquiera un poco el estado de ánimo de la ciudadanía. Las esperanzas depositadas en este nuevo plan se enfrentan, sin embargo, a los mismos problemas que otras medidas anteriores. El nuevo plan tiene como objetivo⁶ ahorrar alrededor de 4000 millones de dóla-

⁵ Paul Krugman, "Argentina gets crucified on a cross of US dollars", International Herald Tribune, 8 de noviembre 2001.

⁶ Así lo expresaba el diario argentino Clarín (Buenos Aires) el 5 de noviembre de 2001: "El acuerdo con las provincias es una pieza clave para sustentar el plan económico que lanzó el jueves el presidente Fernando de la Rúa. Los Estados Unidos y el FMI condicionarán su respaldo a las nuevas medidas a un entendimiento con los gobernadores".

¿Hacia dónde va Argentina?

res, pero necesita del apoyo del FMI y de las provincias.

En principio las provincias, las más importantes gobernadas por la oposición peronista a De la Rúa, han manifestado el apoyo al plan, entre otras razones porque desde diciembre del año 2001 controlan las cámaras del parlamento tras su victoria en las elecciones de octubre y tienen una responsabilidad directa en el desarrollo de los planes económicos.

Pero las primeras disensiones han salido a relucir pronto, y es que numerosos líderes opositores distinguen entre el apoyo a De la Rúa y el apoyo a Cavallo, diferencia preocupante y que pone de relieve una vez más la dramática estructura de partidos del país y la incapacidad para generar un acuerdo político. Las primeras dudas fueron sembradas, como de costumbre, por tanto, por la clase política. El plan nació además herido por las dilaciones del propio gobierno, indeciso sobre cuando ponerlo en marcha y su contenido final, dado que aunque el ahorro que se pretende alcanzar es razonable, en la práctica supone recortar fondos de servicios ya muy afectados, como el PAMI (obra social de los jubilados), que adeuda fondos a los centros asistenciales desde julio de 2001.

Al malestar de la población y la incertidumbre creada por un gobierno indeciso se unió desde el primer momento la insatisfacción de los inversores y el escaso convencimiento de los mercados, que reaccionaron negativamente al anuncio del nuevo plan, cuyo objetivo más importante no es otro que impedir la suspensión de pagos de la deuda externa.

*queda por ver los efectos de
las medidas en la economía
sugermida, cerca del 40%
de la actividad económica
total*

Entre las medidas estrella el plan incluía el canje de los actuales bonos por otros con rentabilidad fija del 7% (actualmente la rentabilidad oscila entre el 12% y el 27%). Sin embargo tras su anuncio los bonos volvieron a retroceder en sus precios, provocando una elevación de sus rentabilidades. La bolsa también reaccionó a la baja. Y es que los analistas argentinos consideran que el sector bancario podría ser uno de los más perjudicados, ya que el plan incluye medidas como la reducción de aportaciones a planes de pensiones o descuentos en las compras con tarjetas de crédito y débito.

El plan, por último, establece un "contrato social" con los argentinos que consiste en esencia en la generalización de subsidios para niños y ancianos en situación de pobreza, además de una reducción de impuestos, anuncio nada impactante en un país donde la recaudación impositiva ha sufrido un desmoronamiento progresivo. Con estos datos, el gobierno, además, debe convencer a las instituciones internacionales, el FMI y el Banco Mundial y a las provincias, a las que hay que insistir en que acepten un recorte en las transferencias que reciben del Estado. En definitiva el gobierno intenta un nuevo ajuste del gasto público y la disminución de los intereses de la deuda.

A pesar del apoyo de las grandes empresas extranjeras con intereses en el país, especialmente de las españolas, y de los avances notables en las discusiones entre Estado y Provincias, la inseguridad y desconfianza ha originado una fuga permanente de capitales que a principios de diciembre de 2001 estuvieron a punto de hacer quebrar algunas entidades bancarias. La decisión inmediata del gobierno fue el bloqueo de fondos con la aprobación de una ley que impide extraer a los ahorradores

más de 250 dólares⁷ en efectivo de sus cuentas a la semana, imponiendo además, medida espectacular en Argentina, la obligación de domiciliar el cobro de nóminas y salarios. Argentina continúa, sencillamente, a la cabeza en la lista de países donde no se recomienda invertir. La medida fue paradójicamente bien asimilada por los ciudadanos, algo que sin duda ayudó a normalizar la situación económica de forma momentánea. Sin embargo uno de los pocos incidentes el primer día de aplicación de la ley, el 4 de diciembre de 2001, pone de relieve la tensión social en que vive Argentina. En Tandil, cerca de Buenos Aires, un joven se suicidó frente a las cámaras para protestar contra los planes económicos y su situación de desempleo. Queda por ver, cuando se cerraban estas líneas, los efectos de las medidas en la economía sumergida, cerca del 40% de la actividad económica total. A penas el 20% de la población tiene cuentas corrientes o de ahorro (en España el porcentaje es del 105%, superior al número de habitantes). El nuevo escenario obliga a los empresarios a legalizar sus trabajadores, lo que ha generado verdadero pánico a un aumento del desempleo en los próximos meses.

⁷ De la Rúa justificó el bloqueo de los depósitos afirmando que intentaba rechazar un ataque especulativo y evitar la devaluación del peso. ABC (Madrid), 5 de diciembre de 2001.

El problema político.

La reactivación económica y la transformación de la imagen de Argentina exigen necesariamente un acuerdo político amplio y la responsabilidad suficiente para llevarlo a la práctica. El problema es que hasta ahora el acuerdo solo ha sido posible bien limitando las reformas, bien bajo presión circunstancial, esto es, cuando la envergadura de la crisis exigía el apoyo internacional inalcanzable sin una imagen de unidad. Pasados los peores momentos la tensión política volvía a discurrir por derroteros normales, limitando la aplicación práctica de las medidas previamente concertadas.

La administración y la clase política tienen una imagen lamentable en Argentina, ganada a pulso⁸ y reconocida por los propios políticos que, sin embargo, no aciertan a enmendar su comportamiento. La primera crítica generalizada es el alto coste del sistema político que resulta irritante en un país donde la clase media se desvanece y los zapatos se compran a plazos. Cuarenta empleados por

senador, emolumentos exorbitantes y percepciones de dinero extrañas, como los 30.000 dólares anuales que cada legislador distribuye como considera oportuno. En un estado donde el salario medio ronda los 600 pesos, el legislador provincial peor pagado recibe mensualmente 14.000. La extrapolación de estos pocos nu-

cuarenta empleados por senador, emolumentos exorbitantes y percepciones de dinero extrañas, como los 30.000 dólares anuales que cada legislador distribuye como considera oportuno

merosos al complicado engranaje de un estado oficialmente federal que cuanta con una burocracia ingente y anquilosada en formas de trabajo superadas en cualquier país occidental da una idea del despilfarro en que vive instalada la República. El origen de estos problemas es múltiple. El populismo peronista primero, el desmontaje sistemático del estado durante la dictaduras de Videla, Viola y Galtieri; el sistema polí-

⁸ Eduardo Duhalde, senador por Buenos Aires y contrincante peronista de De la Rúa en las elecciones presidenciales de 1999 se expresaba así sobre su propio partido: "El justicialismo no está en su mejor momento. Tenemos un oficialismo que está desarticulado y un partido de oposición inorgánico y fraccionado. Somos una dirigencia de mierda en la que me incluyo... Y la gente dice cosas peores de nosotros: nos llaman corruptos, delincuentes, incapaces, mediocres, vendepatrias..." El País, 21 de octubre de 2001, pág. 19.

tico, copia del norteamericano, siempre mal ajustado, peor financiado y escasamente útil para vertebrar el estado y la existencia de intereses corporativos acostumbrados a un marco legal proteccionista, a la medida de sus prerrogativas, son fenómenos que por sí solos, no digamos todos al unísono, son capaces de obstaculizar la implantación de no solo un estado sino una sociedad democrática.

Cuando se acercan los procesos electorales se generalizan la declaraciones y propuestas de racionalización del gasto y ética en el comportamiento político. La propia naturaleza del sistema de partidos, demasiado vinculado a intereses individuales o corporativos; en exceso fragmentado y en descomposición acelerada a medida que la crisis destruye los cimientos de una sociedad moderna hacen imposible el cumplimiento de tales promesas. El cúmulo de intereses no generales en juego es de tal envergadura que permite que se den paradojas como la de un Presidente, De la Rúa cuyo principal oponente es miembro de su propia coalición de gobierno, Raúl Alfonsín. La incapacidad para tomar medidas económicas por falta de respaldo político obligó al gobierno a otorgar al ministro de economía pode-

res especiales; una acumulación de poder que ha generado resentimiento, dado que su origen no está en las urnas y, que además, sigue teniendo dificultades para ser puesto en práctica. Aunque se ha ganado en gran parte el apoyo de la sociedad civil y ha recibido apoyos internacionales extraordinarios, de ninguna manera se ha ganado el mismo crédito en el farragoso entramado político argentino, para cuyos miembros la grave crisis no parece tener la entidad suficiente para alentar un comportamiento solidario y responsable.

En estas circunstancias se han multiplicado los enfrentamientos de Cavallo con miembros de la coalición gobernante, mientras la oposición justicialista, deseando no aparecer como responsables de un desastre nacional mantienen posiciones dialogantes. El enfrentamiento con las provincias, en manos de la oposición, parece demostrar que ese diálogo encuentra, a pesar de todo, obstáculos notables.

El problema social.

Como no podía ser de otra forma los efectos sociales de la crisis son devastadores, y alimentan a su vez los obstáculos que dificultan la regeneración de la sociedad y la

¿Hacia dónde va Argentina?

política argentinas. El proceso de tercermundización que atraviesa el país se traduce en inseguridad (un policía muerto cada seis días), criminalidad, violencia callejera (recordemos los incidentes protagonizados por los trabajadores de Aerolíneas), corrupción, disolución de la clase media, entre otros elementos que saltan a la vista en cuanto se desembarca en el país. Las protestas de desempleados y afectados en general por la crisis utilizan de forma creciente una violencia desmesurada y, en cualquier caso, infringen la ley de forma sistemática sin que el estado tenga medios ni deseos de reprimir las rupturas abiertas del orden público. Otro fenómeno que agrava la ya deteriorada imagen de Argentina.

Al mismo tiempo se reactiva el sindicalismo radical que, como en otros países de Latinoamérica, creció a la sombra del proteccionismo y hace gala de unos comportamientos anticapitalistas exagerados que reducen todavía más la capacidad de acción del gobierno. A ello hay que añadir el empeoramiento de los servicios públicos, entre ellos la sanidad y la educación, dos aspectos que acaban por afectar al final a todo el sistema de equilibrio social. La emigración se

ha convertido, paradójicamente en un país que acogió miles de inmigrantes, en una seria alternativa. Hacia Europa o Estados Unidos, centenares de excelentes trabajadores abandonan Argentina y desarticulan una clase media que se desvanece mientras las diferencias

*lamentablemente la
verdadera crisis del país es
política e institucional*

entre ricos y pobres vuelven a ser abismales.

En estas circunstancias los últimos acontecimientos, en diciembre de 2001, han supuesto el tiro de gracia. El FMI, alertado las contradicciones entre planes económicos y su aplicación práctica negó la aportación de los 1.200 millones de dólares que Argentina requiere para pagar los intereses de la deuda en diciembre. Una abierta suspensión de pagos agravaría aun más la calamitosa situación de la República. El FMI insiste en que se continua ignorando el problema que representa el déficit fiscal. Mientras el acuerdo con las provincias no llega y la CGT (Confederación General del Trabajo) anunciaba una huelga general⁹. Los pretendi-

⁹ La huelga se materializó el día 13 de diciembre de 2001 y paralizó Argentina en medio de numerosos incidentes violentos

dos intentos del ministro Cavallo de alcanzar un acuerdo de concertación nacional se desvanecen mientras se toman las primeras medidas impopulares como la confiscación de fondos de pensiones o la suspensión de los estímulos fiscales puestos en marcha durante los últimos meses.

El FMI no ha cerrado todas las

*entre los estados que
ostentan una especial
responsabilidad del apoyo a
Argentina se encuentran
España y EE.UU.*

puertas. Las conversaciones se iniciaron de forma inmediata, pero es poco probable que Cavallo consiga concertar con su coalición y la oposición las medidas económicas que pudieran satisfacer a la institución internacional. Las medidas anunciadas no han encontrado, de hecho, eco alguno dentro del país y la oposición peronista, que controla ambas cámaras y 14 de las 23 provincias, comienza a considerar a Cavallo como un obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo de ajuste. De esta manera se vuelve a certificar que las tensiones políticas internas continúan primando en el debate entre partidos. No hace falta decir que la dimisión de

Cavallo, o la retirada de confianza al ministro por parte del Gobierno, arruinaría el poco crédito que le queda a Argentina en el exterior y haría imposible el pago de las obligaciones de la deuda en enero, dado que la actitud del FMI ha supuesto la congelación de los créditos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de España comprometidos cuando se aprobó el conocido como blindaje financiero a finales del año 2000.

Conclusión.

Argentina se enfrenta a una gravísima crisis cuyas consecuencias son imprevisibles. Reconstruir una amplia clase media, recuperar hábitos de trabajo o reconducir la violencia generada por el paro y la exclusión socioeconómica imparable de amplias capas de la sociedad argentina no es algo fácil. Han de hacerse todos los esfuerzos posibles para evitar un deterioro todavía mayor que obligue a empezar de cero, con todo lo que ello significa, una vez superado, aunque sea por descomposición, el drama económico argentino en cuya génesis hay mucho de inadaptación a la vida moderna. Pero para evitar ese mayor deterioro es necesario que la vida política reconduzca sus

¿Hacia dónde va Argentina?

pasos y abandone los personalismos, la corrupción y la consideración de la actividad política como un mero trámite que permite ganar mucho dinero de forma inmerecida y fácil.

Lamentablemente la verdadera crisis del país es política e institucional. Aunque afirmarlo sea todavía escandaloso en Argentina es necesario replantearse la naturaleza de un sistema federal cuyo funcionamiento ha sido siempre renqueante, cuando no mera pantomima. Es imprescindible reconocer los errores propios y asumir la responsabilidad de ellos derivada. Este es un problema general en Latinoamérica donde con demasiada frecuencia busca el origen de sus males en los EEUU, en la colonización española o en la globalización, entre otros fenómenos. Una sociedad solo se regenera cuando está dispuesta a asumir su culpabilidad, aunque sea parcial, y su realidad, de una forma crítica y constructiva, pero en cualquier caso sin miramientos. El nacionalismo, esgrimido por intereses partidarios, personales o corporativos constituye un obstáculo evidente en la asunción de esta realidad y además un fenómeno que destruye la lealtad y solidaridad que debe inspirar un patriotismo sano y decoroso. Y esto último se hecha en falta en Argentina. La fuga masiva de capi-

tales es un buen ejemplo, aunque no el último.

La obligación de la Sociedad Internacional es ayudar en la medida de lo posible a que se resuelva el caos económico argentino. Las medidas que impone el FMI pueden, en ese sentido, ser discutibles. Lo que es indiscutible es que la política de aplicación práctica de los planes económicos pone de relieve una dejación de responsabilidad extrema por parte de la clase política, que tampoco ha sabido contribuir a la creación de un sistema de partidos ordenado y capaz de gestionar adecuadamente los intereses generales del estado y sociedad argentinas.

Y entre los estados que ostentan una especial responsabilidad en el apoyo a Argentina se encuentran España y los EEUU. Para ambos supone un riesgo estratégico grave la posible extensión de la crisis al resto del continente y quizás se encuentren en mejor posición que otros para reconducir el desenlace de la crisis. Una crisis que lleva camino de cobrarse la primera víctima, Mercosur, organización inmovilizada por las diferencias de política económica entre Brasil y Argentina, donde el proteccionismo, con sus inevitables represalias en otros países,

pretende abrirse camino a marchas forzadas.

No quisiera acabar sin unas notas de moderado optimismo. Todo el que conozca Argentina se asombra del grado de desarrollo y modernidad que llegó a alcanzar el país. Todavía sobreviven los resultados de aquellos años: un razonable sistema educativo, una clase media ambiciosa y culta y una tradición que servirá de guía a futuras generaciones. Las cosas se pueden arreglar, pero exigen determinación política y altura de miras.

ADENDA

Entre la redacción final de este artículo y su publicación Argentina ha transformado en realidad sus peores designios. La dimisión de De la Rúa inició un proceso de transición política que dejó al descubierto las gravísimas carencias del sistema político de la República. Quizás sea el momento de reconocer que, desde ese punto de vista, Argentina nunca ha sido un país desarrollado. Perón instauró un sistema populista, marcadamente autoritario donde los partidos, sindicatos y grupos profesionales tenían una función clara, servir al poder a cambio de prerrogativas que ga-

rantizaban su preeminencia en ámbitos cerrados de decisión. A pesar del tiempo transcurrido, el desarrollo político de Argentina entre ese período y la actualidad ha estado marcado por la incapacidad para generar un sistema democrático estable y un estado institucional y estructuralmente sólido. En definitiva, Argentina nunca ha desarrollado un estado moderno. Y esa es la base de la profunda crisis económica actual. El escabroso traspaso de poderes a partir de la renuncia de De la Rúa pone de relieve, más allá de detalles escandalosos, algunos elementos clave de la política argentina que expondremos de forma sistemática, a saber:

De la Rúa nunca contó con el apoyo incondicional de la coalición que le permitió ocupar la presidencia. Indirectamente esta debilidad se trasladaba, a pesar de las decisiones del parlamento garantizando poderes extraordinarios a Cavallo, al ministro de economía, que fue siempre incapaz de hacer cumplir sus planes económicos.

Argentina sufre una esquizofrenia animada por la importancia formal de las regiones, propia de un estado federal, y el desequilibrio real entre aquellas y la capital, Buenos Aires. Las regiones, que

¿Hacia dónde va Argentina?

emulan el sistema presidencial nacional, se convierten en el santuario de personajes, que alcanzan al poder gracias a un sistema de partidos extremadamente incoherente, y lo utilizan en beneficio del mismo sistema de corrupción que garantiza su supervivencia política.

El sistema presidencial es una copia del norteamericano, la emulación llega al extremo de influir en la denominación de la sede de la Presidencia, la Casa Rosada. Una copia que traslada a Argentina todos sus defectos y ninguna de sus virtudes. La división de competencias no es clara y, en todo caso está distorsionada por la corrupción política; los miembros del Parlamento son escasamente representativos de sus circunscripciones de origen, de nuevo debido a la manipulación del sistema de partidos y la ausencia de otros estamentos e instituciones de control (algo muy abundante en los EEUU).

La prueba palpable de la crisis del sistema es la propia ocupación del poder por Duhalde, nuevo presidente, el quinto desde las pasadas Navidades, quien perteneciendo nominalmente a la oposición, ha ocupado el poder sin elecciones. Un disparate que ni siquiera la crisis actual justifica.

En defensa de su posición, de legitimidad discutible, Duhalde, un político de pasado reconocidamente corrupto y ferviente admirador de Perón, algo que no mejora su credibilidad, ha insistido en que ocupa la presidencia con el solo afán de salvar a la nación, sintiéndose independiente de cualquier partido. Una afirmación extraña en un sistema parlamentario cuya base, por naturaleza, es la existencia de partidos. Nueva prueba del estado de descomposición del sistema.

Aunque la crisis económica tienda a hacerlo olvidar, los sindicatos, burocráticos, dirigidos por personas escasamente formadas y animados por un populismo anticapitalista exagerado no han contribuido a calmar los ánimos, y han constituido, de hecho, un arma arrojada en la vida política.

La embriaguez nacionalista que lo envuelve todo en Argentina no ayuda a tomar decisiones políticas que, suceda lo que suceda, exigirán sacrificios. El nacionalismo es utilizado por todos los grupos enfrentados para defender sus intereses particulares y se nutre de un supuesto pasado idílico. Quizá sea el momento de reconocer que ese pasado no fue tan esplendoroso y que la bonanza

Ángel Pérez González

económica escondió siempre una vida política turbulenta y escasamente democrática.

Todos estos elementos hacen necesaria una reforma profunda del Estado, una reforma que debe llevarse a cabo con rapidez. La modificación del sistema político debe ser profunda. Un sistema parlamentario de corte europeo, bicéfalo, con un presidente de la República que garantizase estabilidad institucional y un primer ministro capaz de quemar su imagen en la vida política sin por ello generar una crisis nacional sería un primer paso, acompañado de la modificación del sistema fede-

ral, la modernización de la Administración y la consolidación de un poder judicial independiente. Un proceso que exige una labor legislativa intensa que el parlamento no está en condiciones de llevar a cabo. La alternativa al cambio no es tocar fondo, sino la conversión del caos económico y político en norma de funcionamiento. Un proceso que lleva consolidándose durante décadas y forzaría a Argentina, ya sin remedio, a incorporarse por un largo período de tiempo al grupo de naciones menos desarrolladas. En otras palabras, dejaría de ser una excepción latinoamericana. ■